

Política y elecciones en Tamaulipas: la relación entre lo local y lo nacional*

*Arturo Alvarado
Nelson Minello*

I. Introducción

AL ANALIZAR LA POLÍTICA en Tamaulipas encontramos partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas regionales, movimientos políticos locales y también la presencia de burocracias sindicales urbanas o agrarias, la acción de sus dirigentes y la actuación de distintas capas sociales o, aún más, la de una o más fracciones de esas capas sociales. En el ámbito político hallamos, junto con estos personajes, a la estructura federal de poder —que influye en la política estatal—, a la estructura político-administrativa del estado, al gobernador y su espacio político.

En este artículo presentamos una primera parte donde se describe la estructura tradicional de poder y los cambios en la misma así como las rutas de la sociabilidad política en Tamaulipas en los años recientes. En la segunda sección se analiza la legislación electoral desde 1979 y su repercusión en el estado, y se examina en general la evolución electoral, a la vez que se presenta con mayor detalle la acción de los partidos políticos en 1989, a partir del trabajo de campo realizado en esas elecciones. En el tercer apartado se estudia la relación entre lo local y lo federal en el ámbito político-electoral, tomando como ejemplo dos distritos tamaulipecos: el de Matamoros y el correspondiente a los municipios centrales. El artículo se cierra con algunas reflexiones sobre la problemática tratada.

* Por razones de espacio *ES* hizo pequeños cortes editoriales.

II. El panorama sociopolítico

Una tradición que desaparece

Durante mucho tiempo, la matriz del poder en Tamaulipas se consideró una cristalización de una estructura corporativa, controlada por una burocracia sindical y agraria, circunscrita espacialmente a sus cotos de poder en ciudades industriales o a regiones agrícolas donde enraizan sus organizaciones. De tal estructura surgían los mecanismos de patronazgo y clientelismo entre el proletariado rural y el urbano, y desde ella se reclutaba la élite local y sus burocracias, salvo algunas candidaturas federales y los últimos gobernadores. La disputa por el poder local estaba monopolizada por esas burocracias, un gobierno estatal obligado a negociar con las mismas, y una relación con el centro nacional parcelada por los intereses gremiales. Así, surgieron dirigentes obreros como Pérez Ibarra en Nuevo Laredo, líder de la CTM; Agapito González Cavazos, en el gremio de las maquiladoras en Matamoros; Reynaldo Garza Cantú en Reynosa y Joaquín Hernández Galicia, *la Quina*, en Tampico. Y en la cúpula cetemista del estado se encontraba otro prototipo de dirigente obrero tamaulipeco, Diego Navarro.

Pero en los nuevos tiempos esta estructura corporativa ha sido cuestionada y abatida. Sufrió importantes bajas en su controversia con el gobierno central, como la prisión de Hernández Galicia y de Agapito González Cavazos y hay una diligencia contra Diego Navarro. A pesar de todo dicha estructura se mantiene, todavía es funcional a ciertos intereses —fundamentalmente regionales— y a los partidos políticos, incluido el PRI, que no han desarrollado alternativas.

En este contexto gremial y político, la evolución de Tamaulipas durante los últimos años constituyó una matriz con tres aspectos básicos:

1) Su heterogeneidad regional, la fragmentación urbana y regional de su economía, de su sociedad y del poder. Las ciudades del estado tienen empresas y sistemas comerciales de vanguardia y agrupamientos sociopolíticos plurales, mientras el campo posee estructuras económicas y sociales más simples, no obstante la existencia de importantes polos de desarrollo agroindustrial.

2) En consecuencia, sus agrupamientos políticos difieren entre sus regiones, su base social y su plataforma política.

3) Las formas de autoridad y de articulación con el estado se definen por la carencia de una representación unívoca de las fuerzas políticas en la entidad. El gobernador como principal intermediario no tiene el contenido que se le asigna en otros lugares.

Tal heterogeneidad produce una peculiar dinámica de poder dentro

del estado y en sus relaciones con otras instancias institucionales. Por la importancia de los poderes locales en la configuración política de la entidad, es necesario revisar estos aspectos y mostrar los cambios en la función de los poderes locales y en la intermediación política.

Las rutas de la sociabilidad política

En una economía multipolar parece más importante comenzar el análisis de las tendencias asociativas y políticas en los gremios y en la organización del trabajo; pero cierto es que en Tamaulipas la relación entre estructura gremial y poder político, al fundarse en esas corporaciones, se imbrica en los establecimientos partidistas y, si no tiende a monopolizar su acción, sí logra determinar el curso de la selección de candidatos, establecer cuotas, influir en el contenido y las formas de las elecciones y, cuando no se le escucha, tiende a prefigurar escenarios políticos donde asociaciones políticas como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) pueden canalizar el descontento.

Por ello, entre otras causas, los partidos políticos nacionales están en Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo, las principales ciudades; además, existe un arraigado movimiento de oposición —expresado en general por el PARM— que manifiesta el descontento de la población y las pugnas entre gremios y líderes de esa burocracia sindical.

Durante los últimos 15 años surgieron en la escena política movimientos de colonos organizados para regularizar la tenencia de la tierra, obtener servicios e, indirectamente, establecerse e integrarse en el mercado de trabajo y en la comunidad local. Éstos tuvieron importantes acciones colectivas —en Matamoros, Nuevo Laredo, Mante y Tampico—, marco de revueltas políticas que afectaron importantes intereses políticos locales.¹

Así, frente a los cambios globales en la estructura demográfica del estado,² en la urbanización, en la producción industrial y en la reorgani-

¹ Matamoros es la segunda ciudad de importancia electoral en el estado; posee un distrito electoral federal y dos estatales y su ayuntamiento cuenta con importantes recursos. En Nuevo Laredo la presidencia municipal y los distritos electorales local y federal han sido ocupados en dos ocasiones por estos grupos opositores. En éste, el PARM ha desarrollado coaliciones con el PAN, que ha obtenido victorias municipales por sus propias fuerzas en Ciudad Mante en 1989, y en el V distrito electoral de Tampico en 1991, contra la candidatura de Diego Navarro, líder de la CTM estatal.

² Nos referimos, en términos generales, a la baja de las tasas de migración campo-ciudad en el estado, a los cambios en la estructura de la PEA —con un crecimiento menor al previsto, menos joven y con fuerte presencia femenina— y a las cifras menores a las esperadas del censo de 1990 en Tampico y las ciudades fronterizas.

zación del campo y de la participación del estado en el mismo, permaneció una representación corporativa, una forma de asociación y movilización cada vez más como tradicional, que cerró el paso a nuevas formas de sociabilidad y de participación en las comunidades. En este contexto, los partidos opositores aprovecharon indirectamente una lucha que no participaba en o se oponía abiertamente a la plataforma partidaria priista y a los intereses corporativos. Frente a los cambios micro en la entidad, permaneció casi intacta una estructura política que no asimiló la nueva organización y que en las coyunturas electorales tendería a expresarse en su contra.

Esta nueva participación ciudadana va junto con un alto abstencionismo y con el control de diversas autoridades sobre los procesos políticos. Actúa dentro de un poder local construido desde los intereses de los gremios y sus estructuras de representación. A veces, esa dinámica produce situaciones conflictivas. Y pese a la actividad partidista, ese traslape no se ha resuelto aún en una alternativa política que vaya más allá de votar por cierto tipo de liderazgos locales, sin mejor plataforma ideológica o programática que oponerse a las corporaciones locales, o a la imposición externa.³ Este protagonismo electoral fue constante durante el último decenio y ahora se combina con la redefinición de la participación política de las élites obreras regionales en la coalición nacional.

Para entender el complejo proceso de cambio en la entidad hay que agregar dos tipos de cambios políticos. Uno de ellos se integra con las reformas constitucionales de 1983 sobre el municipio, las varias adecuaciones electorales que sufrió la representación nacional, las reformas en la participación del Estado en el campo y, finalmente, los recientes cambios en el PRI. Otro conjunto lo forman las modificaciones ocurridas en algunas localidades del estado ante el ajuste económico y social del decenio pasado, cuando casi desapareció la inversión pública y privada, se reajustó la estructura industrial, cambió la dinámica agrícola y se reorientó la política gremial.

Esto incrementó la competencia política entre las mismas élites, y produjo tensiones en los organismos sindicales y liderazgos dentro de la coalición nacional. Lo mismo sucede con las instancias mediadoras formales, los organismos locales de los partidos, los gobernadores o los diputados.

El efecto en la relación entre los grupos locales y el centro había sido menor, en parte porque no se habían cuestionado esas formas de

³ Un ejemplo es Matamoros, donde Jorge Cárdenas González, hermano del ex gobernador y dueño de una importante cadena de radiodifusoras en el estado, ha llegado al ayuntamiento en dos ocasiones y ha ganado en ese distrito electoral federal.

ejercicio del poder ni la hegemonía de esos cuerpos políticos. Algo distinto se ve ahora, en un escenario integrado por la confrontación en los comicios municipales y en las elecciones federales, las recientes negociaciones laborales en la ciudad de Matamoros, los cambios en Pemex y, finalmente, la reordenación agraria mexicana.

La administración actual

La designación como gobernador de Américo Villarreal —en 1986, con una tradicional campaña priista y en medio de hondos cambios locales y nacionales— se dio en un marco de amistad con el presidente de la República, así como con una larga trayectoria burocrática en el sector agropecuario de la federación. Ésta destacó sus méritos de administrador y lo presentó ajeno a todo compromiso con un estado de cosas denunciado y criticado públicamente en la entidad, por lo que tuvo la oportunidad de tomar las riendas del poder sin compromisos con las élites locales.

Entre las expectativas que generó el gobierno de Villarreal estaba la revitalización del sector agropecuario del estado. Después de casi cuarenta años de atrofia del papel gestor del gobernador frente a la federación, esta administración tuvo la oportunidad de recuperar algunos elementos de intermediarismo, al menos para el sector agropecuario y, ante la defenestración de los líderes sindicales en el sur, hubiera podido recuperar su soberanía en esos escenarios urbanos.

Al comienzo, Villarreal tuvo un papel activo en el apoyo a los agricultores frente a la crisis. Los amparó cuando las heladas asolaron el campo tamaulipeco; más tarde con créditos seguros, apoyo a nuevos proyectos privados en la agricultura, en el contexto de la paulatina desaparición de organizaciones y programas del gobierno federal. Aun así, la reordenación del sector agropecuario y las recientes reformas del artículo 27 constitucional generaron en el campo una dinámica muy por encima de los gobiernos estatales.

En las ciudades los conflictos sociales, sindicales y políticos se resolvieron en una arena donde participaron más las autoridades federales, con una mínima intervención del ejecutivo estatal.

Villarreal intentó retomar su papel de árbitro laboral, en las maquiladoras de Reynosa, al dictar en agosto de 1989 un laudo con el que trataba de resolver directamente un conflicto por la titularidad de 15 contratos colectivos disputados entre la CTM y otro sindicato local, con malos resultados.⁴

⁴ El conflicto se originó por la titularidad de un contrato colectivo de 15 fábricas en Reynosa, que empleaba a 3 000 trabajadores tutelados por la CTM. Ésta denunció que la

En otros terrenos laborales el ejecutivo estatal ha logrado pocos avances; se ha visto obligado a apoyar las medidas federales para desplazar a líderes sindicales. Por ejemplo, debió apoyar a Diego Navarro, nuevo líder de la CTM estatal y una de las puntas de lanza del centro contra los antiguos dirigentes laborales de Tamaulipas. El apoyo se le revirtió: en 1991 Navarro perdió frente al PAN el V distrito electoral de Tampico.

El apoyo estatal y el federal han logrado poco para consolidar a los nuevos dirigentes obreros, derrotados en el plano electoral. Mejor suerte tuvo Juárez Mata, dirigente de la Sección I del sindicato petrolero, quien venció en las elecciones de 1991, aunque fue su propio entorno el que lo apoyó y puso las bases de esa victoria.

En el terreno social, el gobernador, al igual que otros ejecutivos estatales en el país, enfrentó la fuerza del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en su entidad, que mermó su capacidad gestora y su presupuesto para ello, al tiempo que le creó un fuerte personaje de ejecución social, Manuel Cavazos Lerma, actual candidato priista a sucederlo.

Adicionalmente, se produjeron dos reformas que reordenaron el escenario estatal: una fue la reforma al artículo 115 constitucional, para fortalecer los municipios, su integración plural y protegerlos de destituciones arbitrarias;⁵ la segunda fue una reforma a la ley electoral estatal.

En el contexto de ambas reformas, los partidos de oposición lograron participar en varios gobiernos municipales, un cambio importante para el estado, los municipios y los grupos de poder locales. Con la reforma de 1989 el Congreso del estado se integra con 15 diputados de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. A raíz de ello, ingresaron al Congreso representantes del PARM, del PAN, del PSM y del PST.*

Pero los efectos de la reforma al artículo 115 constitucional han sido menores. Ésta no fue impulsada por los grupos locales, entre otras razo-

Junta Local de Conciliación y Arbitraje estaba apoyando actos del Centro Patronal de Reynosa —dirigido por Francisco Narro— y a un Sindicato Industrial de Trabajadores y Operarios de Empresas Exportadoras, cuya existencia fue declarada nula en dos instancias laborales y que la CTM denunció como “blanco”. La intervención de Fidel Velázquez produjo declaraciones de las cámaras locales de comercio y empresarios en ambos lados de la frontera, que condenaron el paro y amenazaron con retirar sus inversiones. El arreglo final prácticamente desmanteló el sindicato blanco, pero dejó sindicatos de la CTM mucho más flexibles. *La Jornada*, 5 y 7 de agosto de 1989.

⁵ La reforma surgió al término de la gestión del gobernador Martínez Manautou, quien no se vio favorecido por el acceso a la presidencia de Miguel de la Madrid. El gobierno y el Congreso locales se limitaron a emitir la adecuación constitucional al estado, divulgar la reforma y dictar algunas medidas administrativas para su puesta en práctica.

* Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Acción Nacional, Partido Socialista Mexicano y Partido Socialista de los Trabajadores.

nes porque esas élites no necesitan los escasos recursos municipales. El municipio les interesa más como instancia de control político, que ha permitido el funcionamiento de sus actividades y negocios.

Ahora bien, el surgimiento de nuevos actores urbanos, la presencia de opciones políticas locales y la desaparición de fuerzas antiguas, desemboca en ayuntamientos con concejales de nuevos grupos o partidos, así como en un mayor compromiso de los partidos en la política local. Esto puede apreciarse al analizar los procesos electorales recientes. ¿Podrían relacionarse estos cambios con la situación electoral del estado? ¿Qué nos indican los profundos cambios suscitados en escala estatal y regional?

III. Elecciones en Tamaulipas

Legislación electoral

Para comprender la evolución de la política local debemos ver cómo se han adecuado las leyes y los códigos electorales estatales al marco de los intereses nacionales.

Nuestro punto de partida es la reforma electoral de 1979, que estableció una normatividad y una relación distintas con los partidos. Esta reforma obligó a los gobiernos estatales a adecuar sus constituciones y permitir el libre ejercicio de actividades de los partidos. Luego, al combinarse con las reformas al artículo 115, en 1983, posibilitó que aquéllos, con la representación proporcional, participaran en legislaturas y ayuntamientos locales. Más tarde, en 1986, cambió el Código Federal Electoral. También el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales produjo más cambios en el estado.

En 1989 el panorama electoral se modificó, pues el gobernador propuso una reforma que, entre otras medidas, creaba tres nuevos distritos estatales (en Reynosa, Matamoros y Ciudad Mante), reconocía partidos regionales, planteaba una nueva integración de los organismos electorales y cambiaba el calendario electoral de la entidad.

Ésta, la iniciativa local más significativa, comenzó en noviembre de 1989, cuando el gobierno estatal convocó a un proceso de consultas para la renovación de aquella ley; la consulta expresó el interés del ejecutivo tamaulipeco por incorporarse a los cambios nacionales y establecer una nueva concertación en el estado. La oposición la nombró Ley Batres, en honor del secretario de gobierno estatal, principal impulsor y responsable de la reforma.

El proceso y la propuesta serían criticados por la oposición en las

consultas populares realizadas; no obstante, intervino en la formulación de la ley.

Junto con la ley, las autoridades depuraron el padrón electoral en 1989, estableciendo 1 315 981 electores en los 43 ayuntamientos del estado.

Los partidos políticos nacionales participan desigualmente en Tamaulipas. El PRI está presente en todo el estado, mientras el PAN extendió su influencia en los municipios más urbanizados; el PARM tiene poder en las localidades del norte, principalmente; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) muestra una presencia exigua, y el resto de los partidos no figuran en el terreno estatal. Agrupaciones como el Partido Frente Cardenista de Renovación Nacional (PFCRN) son coaliciones de minorías más que partidos con base organizativa y electoral.

Hay que considerar que en Tamaulipas se han sucedido disputas electorales muy antes y al margen de ese proceso de apertura política y legislativa federal. Sus protagonistas fueron líderes o jefes de camarillas políticas disidentes del PRI o de la familia política estatal. Abundaremos sobre este tema en el punto IV. Veamos ahora cómo los cambios en la entidad se visualizan en los procesos electorales.

Examen general de la evolución electoral

• Las elecciones de 1988

Al contrario de lo que se afirma en el país y en la región fronteriza, las elecciones de 1988 en Tamaulipas no fueron muy distintas de las de toda la década: preservaron el poder de grupos corporativos tamaulipecos, sustentándose en un cierto caudillismo, acompañado por la presencia de partidos regionales. Sin embargo, se produjeron situaciones que conviene considerar.

Tamaulipas reflejó un perfil electoral tradicional. La abstención superó el promedio nacional de 56%. Pero, aunque el candidato priista ganó ampliamente —con 59.3%— el Frente Democrático Nacional (FDN) obtuvo un sorprendente 30.2% de la votación, que sus partidos coaligados nunca habían obtenido en el estado. El PAN obtuvo 9.9%, siguiéndole Gumersindo Magaña (PDM) con 0.4% y Rosario Ibarra (PRT) con 0.2%.⁶ No obstante esta tipicidad nacional, los resultados sí reflejaron conflictos locales, ya vinculados al FDN, ya dentro del PRI estatal.

⁶ El recuento arrojó 470 309 electores, de un padrón electoral de 1 120 265 personas. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, *Elecciones de 1988. ¿Qué pasó?*, México, Diana, 1988, p. 6.

La capacidad del PARM fue mayor al coaligarse al FDN, lo que se sumó a su capacidad para movilizar a un electorado local, que se ha mantenido durante varios años. Esto sucede en un escenario donde el PARM utiliza los mismos recursos del PRI para manejar la votación; sus dirigentes lograron de esta manera reacomodarse y permanecer como partido estatal. Así sucede, por ejemplo, en Matamoros, que en dos ocasiones ha dado el triunfo al candidato parmista al ayuntamiento, Jorge Cárdenas González.

En Nuevo Laredo, el PRI obtuvo 59.7% de los votos, el PARM 20.8%, el PAN 13.8% y el resto 4% en conjunto. Reynosa y Matamoros tuvieron un comportamiento similar, con los parmistas en segundo lugar en presencia regional. En Reynosa, oficialmente se reconoció el triunfo del PRI, en una votación disputada por el candidato del FDN, cobijado localmente por el PARM.

En las zonas petroleras, los candidatos priistas ganaron sin problemas y entre ellos están los actuales diputados desplazados del Comité Ejecutivo del sindicato.

Salinas de Gortari ganó las elecciones presidenciales en todo el estado y también en la zona conurbada del sur, pero aun en ese rincón de tradición priista, el voto oficial disminuyó, en favor tanto de Cuauhtémoc Cárdenas como de la coalición y, en menor medida, del PAN, que tímidamente se asomó en algunas ciudades del estado. Madero dio la victoria a Salinas (45.7% pero repartió en la oposición buena cantidad de votos: PARM, 13.3%; PFCRN, 9.7% (prácticamente el único lugar donde tuvo presencia), Partido Popular Socialista (PPS) 9.0%, PAN, 7.3%, PSM, 1.8% y PRT, 0.4%. En este municipio, el FDN alcanzó 34% de los votos, mientras Tampico y Victoria siguieron el patrón de captación priista.

En los municipios más rurales se mantuvo la tendencia conocida de votaciones priistas; por ejemplo, en San Fernando, cabecera del VIII distrito, el PRI obtuvo 75.2%, contra 12.2% del PARM y 1.3% del PAN, ganando Manuel Cavazos Lerma.

En las diputaciones federales de mayoría relativa, el PRI obtuvo 61.1% de los votos y todos los distritos, excepto el de Nuevo Laredo, donde ganó el parmista Jesús González Bastián, porque el Colegio Electoral anuló la credencial de mayoría del priista.⁷

El PARM captó todavía más electores en el norte: 19.3% en Reynosa;

⁷ Se adujo como pretexto para invalidar al diputado priista su nacimiento en Laredo, Texas. Éste fue prácticamente obligado a ceder, aunque su patrocinador se quejó del procedimiento que afectaba su posición. Con esto, y cediendo otras posiciones, el PRI logró que el PARM permaneciera en el Colegio Electoral para la calificación de las elecciones de 1988.

24.9% en Matamoros; 26.1% en Río Bravo; le siguió San Fernando, con 11.5%, mientras que en el sur obtuvo 18.3% en Ciudad Mante; 8.8%, en Ciudad Madero y 6.3% en Tampico. En promedio en todo el estado, el PARM sumó cerca de 15 por ciento.

Por su parte, el blanquiazul (PAN) obtuvo 8.9% de los sufragios, destacando Tampico con 13%, mientras el PPS logró 4.4%, el PFCRN 4.2% y el PSM 1.8%. El resto no llegó ni a un dígito. Paralelamente, los candidatos priistas a diputados y senadores triunfaron con amplios márgenes, aunque fueron cuestionados en la preselección o posteriormente se intentara su desafuero junto con el dirigente político que los formó, como en el caso del senador petrolero Ricardo Camero.

- Las elecciones de 1989

Este apartado considera una visión de los partidos políticos activos en la entidad, apoyada en la visita de campo a Matamoros, Ciudad Victoria y Ciudad Madero en esa época, y otras reflexiones acerca del proceso político.

Para entender las elecciones tamaulipecas de 1989 hay que recordar: 1) la espectacular aprehensión de Joaquín Hernández Galicia y varios de sus colaboradores; 2) el rumor del desafuero de los diputados y senadores "quinistas" en la LII Legislatura, y 3) la pérdida de los cultivos en cerca de 800 000 ha de temporal, por el mal clima. La federación anunció amplios apoyos a los damnificados y organizó giras de funcionarios federales para proclamar distintas obras y, posteriormente, del propio presidente de la República para inaugurar obras de magnitud en el sur (las instalaciones ferroviarias en el puerto de Altamira) y, en noviembre, para entregar títulos de tierras a colonos en Matamoros y otras localidades. Cabe ahora pasar a una apreciación general de las actividades de los partidos y los gremios en el estado.

PRI. Para su delegación estatal estos tiempos son quizá más difíciles que para el resto de los grupos políticos, por los cambios nacionales producidos por la crisis de 1988, por la propuesta de renovación planteada por la cúpula priista pero, sobre todo, por los resultados electorales de los últimos años.

Los priistas tamaulipecos fueron renuentes en sus inicios a la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI de buscar nuevos mecanismos de selección de sus candidatos. La consulta directa a las bases sobre ese tema significaba auscultar e involucrar a todas las instancias del partido; implicaba redefinir el juego de poder entre el gober-

nador, las dirigencias estatal y nacional del PRI y las fuerzas políticas de sus regiones.

Pero el mayor significado de la reforma priista era retomar un debate permanente dentro de su estructura, redefinir el equilibrio entre las organizaciones corporativas, tan importantes en el priismo tamaulipeco, y las organizaciones territoriales, a las que apeló la nueva convocatoria partidista. Significaba cuestionar lo que se consideraba indiscutible en el estado, las cuotas de poder, para el centro excesivas, impuestas por los sectores locales contra los supuestos líderes de espacios territoriales.

Las fuerzas a las que apeló la reforma en su lucha contra las corporaciones acapararon la atención en las elecciones municipales de 1989; estas corporaciones se pronunciaron contra un proceso electoral que minaría su poder de decisión sobre los candidatos locales. Cuando se registraban las precandidaturas, la dirigencia priista estatal decidió otra modalidad de designación, que combinaba la selección interna con la consulta directa, en una suerte de convención donde las fuerzas locales del partido decidirían cuál sería la combinación idónea. Para mayo de 1989, las listas preliminares se negociaron entre el gobernador y el presidente del CEN del PRI. Este proceso retrasó la integración de las planillas municipales y otras candidaturas para la legislatura local; fue apenas en agosto, cerca del límite legal para registrar candidatos, que se integraron las listas definitivas.

Este juego se complicó por la intervención de distintas autoridades partidarias y de los gobiernos estatal y federal. Durante la selección, abundaron las protestas de priistas por la imposición de candidatos en los municipios de Xicoténcatl, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde se intentó invalidar el autodesape de la CTM de principios de agosto.⁸ Ante el juego de poder, en el que los sectores habían mantenido su control, la federación terminó por negociar algunas candidaturas locales obviando la auscultación a la base. Finalmente, se informó que en 37 municipios se consultaría a la base y en seis más se harían convenciones: Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, Reynosa y Ciudad Mante. Precisamente, el PRI perdió los tres últimos ayuntamientos.

Las elecciones internas parecieron funcionar en municipios donde las corporaciones y otros grupos no estaban enfrentados ni con la dirigencia nacional del partido ni con grupos locales importantes. Fue eficaz también en aquellos tradicionalmente más priistas, rurales o urbanos. Pero en localidades con antecedentes conflictivos, el proceso fue detenido por los líderes sindicales, incluso durante el transcurso de la votación, pues sostenían que las autoridades del partido cometían fraude

⁸ *El Diario*, 15, 20 y 30 de agosto de 1989.

en su perjuicio, mientras los precandidatos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) aseguraban ir a la delantera. El transfondo de la lucha se interpretó nacionalmente como la continuación de una pugna central por desplazar a los “cacicazgos” sindicales que en Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Reynosa y hasta en Tampico terminaron derrotando a los precandidatos cenopistas.

En Nuevo Laredo el líder obrero Pérez Ibarra no se resignaba a la derrota electoral de 1988. Anunció que no permitiría la reedición del agravio contra sus protegidos políticos, exigió el ayuntamiento y la diputación de ese distrito local y presionó a la CTM para afianzar a sus candidatos. Pero en el mismo Nuevo Laredo se hizo público que la CNOP quería evitar su postulación al ayuntamiento; aquella organización, sin embargo, no pudo controlar ni llevar adelante el proceso de selección interna en el PRI, dejando pendiente la pugna entre la CTM y la nueva dirigencia priista.⁹ En Ciudad Mante y Matamoros surgieron candidatos que parecían estar más cerca de la nueva propuesta priista, pero en esos municipios se avizoraban tiempos difíciles.

Poco después de que surgieron las candidaturas, se anunció un amplio programa de gasto social federal ejercido por el Pronasol.

PAN. El Partido Acción Nacional celebró su convención para elegir su directiva estatal en mayo de 1989, pero demoró más en nombrar sus candidatos. En Ciudad Victoria, Tampico y otros municipios sus representantes obtuvieron muy poca aceptación, en Jaumave el candidato desertó —aduciendo amenazas de priistas— pero en Ciudad Mante saldría victorioso.

En 1989, los panistas realizaron una campaña más extensa que las anteriores. En Río Bravo, Valle Hermoso, Jiménez e Hidalgo efectuaron, según dirigentes estatales, buenas campañas aun sin organización anterior. En la última de estas localidades, por ejemplo, el promotor del PAN murió en un accidente y su lugar fue ocupado por su viuda, hija de ejidatarios; la campaña redundó, sostienen, en mayor cobertura del partido, no obstante sus dificultades para organizarse y conseguir militantes. En Ciudad Mante propusieron un candidato originario del lugar, que se impuso a la priista Narcisa Cabriales, que no es originaria de esa ciudad y contó con una fuerte oposición dentro de las mismas filas de su partido. Las dirigentes entrevistadas señalan también la importante labor de la mujer panista en esta campaña electoral; según ellas, por no tener obligaciones laborales como sus maridos, sentirse más libres de presiones, pudieron continuar la lucha política con menos trabas.

⁹ *El Diario*, 20 de julio de 1989.

El CEN panista dio mucha importancia a esta elección y envió a dirigentes nacionales a varios municipios, entre otros Ciudad Mante y Ciudad Victoria, y designó delegados —de acuerdo con sus declaraciones— en la totalidad de las casillas en Hidalgo, Mante, Jiménez, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Ciudad Madero, en 95% de las casillas en Tampico y en 80% en Matamoros.

Las protestas panistas sobre el proceso electoral se refieren, fundamentalmente, al “rasurado” del padrón. Señalaban que la eliminación de votantes opositores se había realizado con un censo entre los empleados estatales, a partir del cual se borraban los que no serían votantes del PRI. En entrevista realizada el día de las elecciones, plantearon que en 11 casillas de Matamoros no se habían aceptado a sus delegados y algunas ánforas tenían doble fondo; en Ciudad Madero muchas casillas se instalaron con un atraso considerable; la tinta indeleble no lo era tanto y muchos presidentes de casilla se negaban a aceptar la tinta aportada por el PAN; en algunas casillas de Tampico no se firmaron todas las boletas; en Nuevo Laredo el coordinador de seguridad pública se presentó con gente armada frente a varias casillas, amedrentando a los ciudadanos; en Hidalgo se permitió votar sin credencial en casi todas las casillas y muchas cerraron antes de la hora establecida en la Ley Electoral. El incidente más grave sucedió en Ciudad Mante, donde Norberto Corella, representante nacional del PAN destacado en esa localidad y otros militantes panistas fueron detenidos por la policía municipal, según la versión del PAN cuando querían impedir que esa misma policía robara algunas ánforas.

PRD. El Partido de la Revolución Democrática sólo pudo armar algunas candidaturas en municipios urbanos del estado. Tuvo una menor presencia que el FDN, producto de sus divisiones y de la separación del PARM. Tampoco pudo capitalizar los conflictos de los petroleros ni el descontento de la población en Matamoros y Nuevo Laredo, ni mucho menos aumentar su aceptación en el campo. En Ciudad Victoria, durante la jornada de las elecciones y todavía algunos días después, funcionaron dos comités estatales del PRD; ambos se reclamaban representantes del partido. Uno de ellos lo formaban los seguidores de Pedro Etienne, político de antigua trayectoria en el estado y, antes, en el PFCRN.

Las críticas del PRD a los comicios municipales fueron similares en ambos comités. Señalaron que en Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Tampico se permitió votar sin credencial y sin estar en el padrón electoral; en Ciudad Madero fueron expulsados 15 representantes del PRD en otras tantas casillas; en Ciudad Victoria, Tampico, Madero, González y Villagrán, denunciaron lo que llamaron “operación carrusel” mediante

la cual jóvenes vestidos con ropas deportivas votaban en casillas bis, y se trasladaban inmediatamente a otras.

PARM. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, segunda fuerza electoral en el estado, dejó patente su deseo de no compartir su bastión político de los municipios fronterizos con las fuerzas coyunturales del FDN, y se mostró también como una opción política frente al PRI estatal en varios de los municipios urbanos de Tamaulipas. Triunfó en Matamoros y Reynosa, obtuvo escaños en el Congreso y varias regidurías.

• Las elecciones de 1991

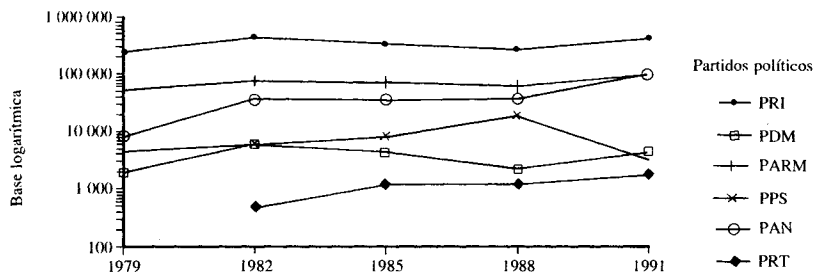
a) Panorama electoral de la década anterior.

En una primera apreciación, el comportamiento en las elecciones federales de 1988 y 1989 no parece diferir mucho de lo sucedido en las elecciones estatales. En ambas el PRI fue el principal damnificado de las reformas legales, de la actividad partidista y de la expresión electoral en el último decenio. El PARM y el PAN aparecen como los principales beneficiarios, aunque sus logros resulten de estrategias políticas distintas.

Las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5 muestran la evolución de la captación de cada partido. El PRI sólo logró levantarse del largo declive durante las elecciones de 1991, pero aun así obtuvo votaciones apenas cercanas a las de 1985. El PARM muestra una trayectoria sostenida por un piso mínimo de votantes que han apoyado a sus candidatos durante la década, lo que significa una cuota permanente de votación que ha servido de base para mantener el registro de ese partido.

Gráfica 1

Tamaulipas: evolución electoral
1979-1991



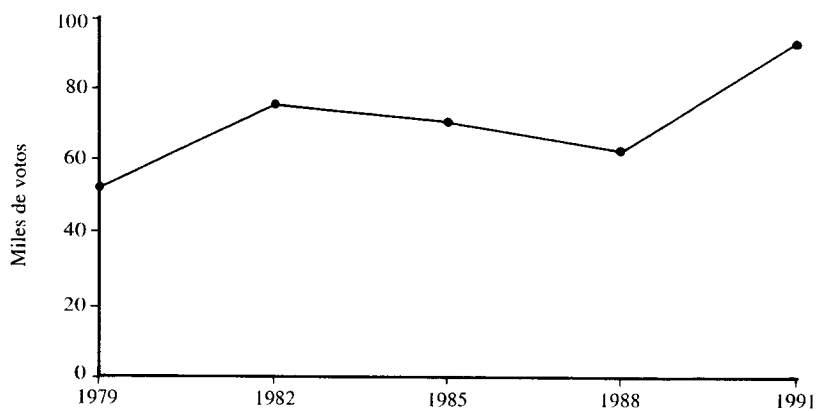
Con base en las elecciones para diputados de mayoría relativa.

Gráfica 2

Tamaulipas: evolución electoral del PRI
1979-1991

**Gráfica 3**

Tamaulipas: evolución electoral del PARM
1979-1991

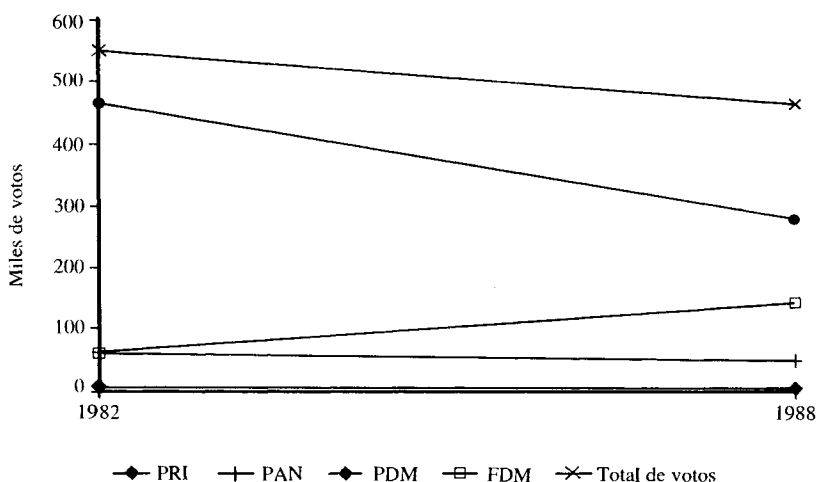


El PAN aparece como el partido de oposición más beneficiado y con mayor crecimiento relativo, a pesar de liderazgos y administraciones erráticas en este periodo. Su captación se concentra en las ciudades y es allí donde ha logrado avanzar frente a todos los partidos. Su presencia en el campo tamaulipeco es mínima.

En cuanto a las elecciones presidenciales (véase gráfica 6) la votación muestra que la participación ha caído enormemente en estos comicios, lo que se ha acompañado por la caída paralela de la votación priista y un crecimiento, al parecer coyuntural, en 1988, de la oposición.

Gráfica 6

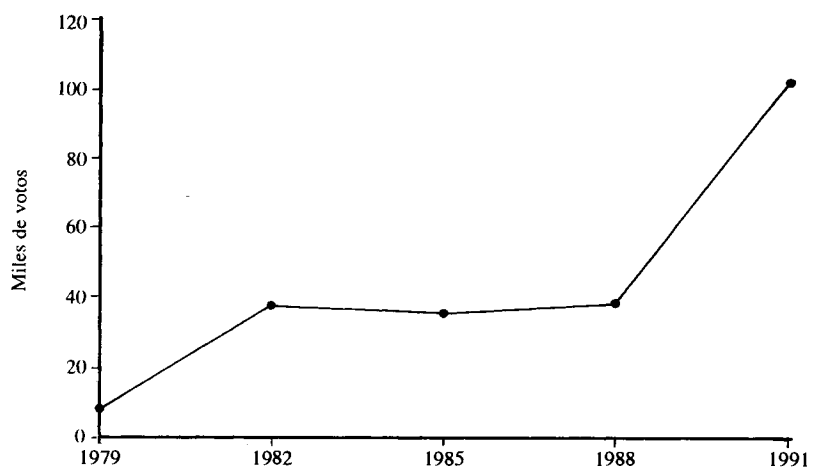
Tamaulipas: elecciones presidenciales
1982-1988



Las elecciones para el Senado (gráfica 7) tienen este mismo patrón, mientras las de diputados (gráfica 8) muestran una mayor variedad en la participación, que se asemeja a la urbana en las elecciones estatales. Allí también se ven las tendencias generales ya descritas, aunque en realidad significan mayores pérdidas para los partidos más pequeños.

Gráfica 4

Tamaulipas: evolución electoral del PAN
1979-1991

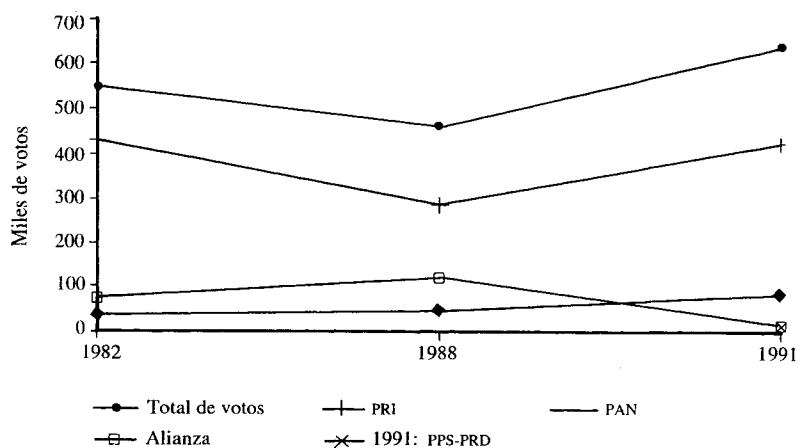
**Gráfica 5**

Tamaulipas: evolución electoral del PPS
1979-1991

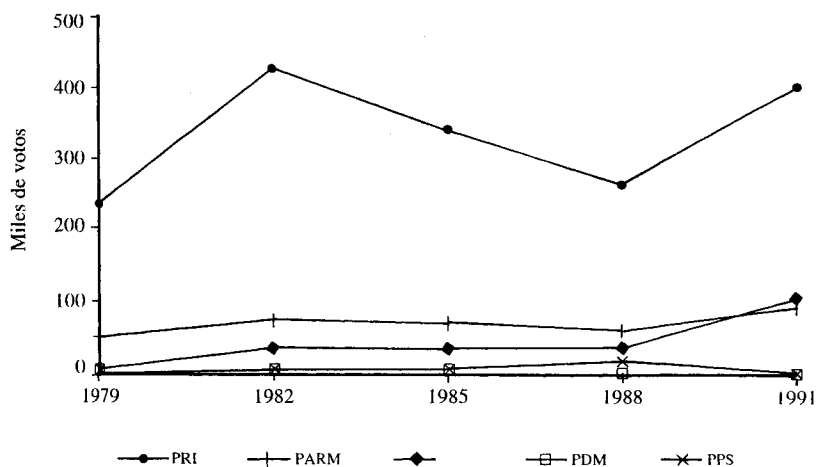


Gráfica 7

Tamaulipas: elecciones para senador
1982-1991

**Gráfica 8**

Tamaulipas: elecciones para diputados
1982-1991



En general, las estadísticas electorales en este periodo muestran un creciente proceso de depuración. Lejos están los resultados de elecciones donde la votación del PRI superaba al padrón electoral. Asimismo, es clara la tendencia decreciente de votaciones en favor del PRI, superiores a 60% de la votación efectiva. Esto parece producto de la combinación de legislaciones más estrictas que eliminan la discrecionalidad de autoridades electorales; de la presencia de partidos políticos; de la distinta forma de expresión de los electores y, también, de la cambiante posición de los grupos de poder local respecto al proceso electoral.

IV. Las elecciones y las relaciones entre lo local y lo federal

Las ciudades tamaulipecas crecieron notablemente en los ochenta, y se dieron municipios urbanos más complejos y con mayor participación social y partidaria. Las elecciones en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Mante, Tampico, Ciudad Madero y Ciudad Victoria como el polo de contraste, han sido disputadas por candidatos que lograron victorias de mayoría decisivas sobre la clase política priista en el estado. No es así en el campo tamaulipeco, donde aún hay tasas de captación priista superiores a 70% de la votación total. Es notorio el crecimiento del abstencionismo, tanto en las elecciones federales como en las locales, pero su principal fuente es el campo y no las ciudades, como lo demuestran las elecciones municipales de 1989, y aún más las federales de 1991 (gráfica 1). La imposibilidad de los partidos de penetrar las estructuras y la cultura de participación del campo parece acompañarse con una pérdida de convocatoria de los organismos rurales del PRI. Aun así, la persistencia del predominio de éste se explica también por la integración política estatal y territorial de los organismos rurales, frente al corporativismo nuclear que existe en las ciudades. Así, la participación y la construcción de agentes políticos públicos se circunscribe a las ciudades.

En las elecciones locales los grupos de poder local tienden a orientar sus intereses de acuerdo con los nuevos parámetros surgidos de la experiencia partidaria y de los recientes colapsos electorales del partido oficial. La experiencia reciente ha abierto nuevos juegos y alternativas en la lucha por controlar los recursos locales; también le ha dado a la federación y a las distintas autoridades electorales locales un margen legal menor.

Por otra parte, la ya señalada desaparición, en la práctica, de los antiguos dominios obreros, la presencia activa de nuevos estratos sociales y de organizaciones de colonos en las ciudades, y las nuevas demandas urbanas, rebasan el antiguo marco de dominio electoral y social, en

donde reaparecen el caudillismo y las expresiones de una cultura localista. Esto hace que la votación en las ciudades exprese más lo partidario en cuanto tal.

Estas derrotas sin embargo, forman parte de una reorganización del antiguo bloque político y se acompañan también de movilizaciones urbanas, de colonos, de estudiantes, de trabajadores que buscaron expresar su descontento contra los gobiernos priistas o su apoyo a caudillos electorales, como Jorge Cárdenas. Las ciudades tienen la misma tendencia, pero no parece existir enlace entre cada una de ellas, ¿es una consecuencia del corporativismo nuclear y disperso?

También hay que tener en cuenta que las reformas al artículo 27 constitucional pueden significar un cambio, pues los campesinos podrían integrar nuevas clientelas y nuevas formas de representación político-partidaria.

Cambios en el poder local y electoral

Mil novecientos ochenta marca, por primera vez, el triunfo de un candidato parmista y de oposición en las elecciones municipales de Matamoros, Jorge Cárdenas González.

En Nuevo Laredo se dio un proceso similar en las candidaturas a diputado federal, pues en la década anterior, en varias ocasiones, los precandidatos del PRI no designados se lanzaron bajo el registro del PARM y ganaron. Esto le ha dado algunas victorias, como la del actual jerarca parmista, Cantú Rosas, que a su vez han derivado en una votación significativa por ese partido en los municipios fronterizos con los Estados Unidos. Desde entonces, el PARM ha logrado un espacio de influencia permanente; no obstante, su composición es atomizada e irregular.

• Los distritos de Matamoros y los municipios centrales

Examinemos ahora dos escenarios como ejemplo de la dinámica de poder local y regional; uno de ellos, Matamoros, una ciudad con una presencia parmista sólida y en ocasiones mayoritaria, y el amplio y diverso VIII distrito electoral federal, con cabecera en San Fernando, bastión rural priista. El primero expresa los combates contra el corporativismo y muestra la pedacería política generada en Tamaulipas. El segundo señala la vaciedad de la política electoral frente a las cambiantes condiciones de vida campesinas.

Matamoros. Este caso ilustra particularmente los cambios locales. No es una ciudad donde la conflictividad social encuentre formas de manifes-

tación comparables al centro y sur del país. La organización ciudadana para plantear demandas y exigir soluciones a las autoridades parece ser ajena a la población; no obstante, la última elección municipal, de 1989, así como la primera experiencia opositora triunfante del PARM en el municipio, de 1980, indican la inquietud de una población otrora atada al corporativismo laboral y político.

Quizás la primera característica que debe tenerse en cuenta es la magnitud de la organización sindical matamorenses, constituida por las agrupaciones de maquiladoras reunidas en el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI), comandado por Agapito González. Este líder había sido, hasta 1990, el único enlace con la CTM nacional. El resto de la fuerza trabajadora se divide en sindicatos de rama locales, afiliados también a la CTM, entre los cuales es importante el de transportes urbanos (peseras). Esta estructura canaliza las inquietudes laborales y satisface, de cierta forma, algunas demandas básicas de los agremiados.

El funcionamiento de la ciudad se ha impregnado de los matices que las organizaciones laborales y su participación en los partidos le imprimen, en su interacción con el resto de la comunidad y con las instituciones públicas.

Las agrupaciones de colonos tienen una presencia muy circunscrita en la práctica. Buena parte de ellas se remonta a principios del decenio pasado y son producto de las necesidades de los grupos políticos locales de contar con apoyos en la comunidad para anteponerlos a las organizaciones sindicales, hasta entonces tradicionales fuentes de aprovisionamiento de contingentes movilizables para sus causas políticas o partidarias.

Su aparición coincide con el surgimiento de Jorge Cárdenas González. El PARM local lo postuló para alcalde por el periodo 1981-1983 y su candidatura y elección marcó la culminación de las tensiones y el deterioro de la imagen del PRI local, iniciada años antes con las diferencias entre el gobernador Enrique Cárdenas González y Agapito González. Esta opción política resultaría eficaz contra el cacicazgo obrero de Agapito González, quien con el apoyo de los grupos empresariales locales había dominado la escena política en Matamoros por espacio de más de dos décadas.¹⁰

Las organizaciones de colonos se agruparon básicamente en el PRI (Liga Municipal de Organizaciones Populares, LMOP), en una Unión de Colonos independiente y en el seno del PARM, como grupo de apoyo de Jorge Cárdenas González. Desde entonces, los grupos de colonos están

¹⁰ Jorge Cárdenas fue diputado federal y nuevamente alcalde, por el mismo partido, en 1989. Vicente Sánchez: *Matamoros, Tamps.: la estructura del poder local*, mimeo., 1990.

formalmente organizados, aunque divididos en cada colonia y con poca capacidad de tomar decisiones autónomas. Esto los ha hecho permanentemente manipulables y dependientes de sus liderazgos, y su estructura se ha deteriorado hasta convertirse en un reducido grupo, que se moviliza en uno y otro bando (PRI y PARM). De hecho, en las recientes elecciones federales de 1991, bajo la bandera del Pronasol, la crucial regularización de la tenencia de la tierra, con la promesa de obras sociales o, en general, de gestoría, propició que el PRI y sus candidatos recuperaran en escasos dos años un territorio que había ganado el PARM en 1989 y que otros partidos de oposición empezaban a tomar.

En Matamoros pocos conflictos guardan relación con los servicios, la vivienda, la tenencia de la tierra, etc. Ocupa nuestra atención otro tipo de confrontaciones en la comunidad. Describiremos los más dignos de mención por su trascendencia. Nótese que el trasfondo general ha sido la pugna entre los grupos locales de poder en turno.

El más antiguo entre los que nos interesa recordar sucedió en julio de 1978, durante la presidencia de Antonio Cavazos Garza; algunos puestos clave del ayuntamiento estaban en poder de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM), al mando de Agapito González, incluida la Dirección de Policía. La muerte de un adolescente a manos de elementos de esa corporación originó una protesta popular que demandaba castigo para los autores del crimen y la destitución del delegado de la policía. Cavazos Garza manejó la situación de tal manera que produjo la movilización ciudadana, la quema del palacio municipal y el saqueo de algunos comercios del centro de la ciudad. El conflicto fue finalmente resuelto con la intervención del ejército y la salida del delegado de policía.

En mayo de 1981, siendo presidente municipal Jorge Cárdenas González, la FRTM y sus sindicatos afiliados llevaron a cabo un paro total en represalia por el supuesto hostigamiento de que era objeto su líder, Agapito González, por parte de las autoridades municipales. El paro incluyó servicios vitales para la ciudad como el transporte público y afectó a los negocios y fábricas en los que dicha central obrera contaba con alguna presencia. El paro terminó cuando la dirigencia nacional de la CTM y la Federación de Trabajadores de Tamaulipas intervinieron en favor del líder obrero.

En junio de 1987, recién formado un Consejo Municipal de Administración encabezado por Fernando Montemayor Lozano, ocurrió un enfrentamiento entre un ex funcionario de la anterior administración, entonces delegado local del Comité de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), organismo federal, y el director de Planeación del municipio, a quien el primero acusaba de especular con terrenos. El delega-

do de la Corett encabezó un mitin de unos 400 colonos para pedir la destitución del director de Planeación. Esta situación fue aprovechada por Montemayor Lozano para pedir la remoción del delegado federal en Matamoros, lo que obtuvo, dando entonces por terminado el episodio.

El transporte público es el servicio más conflictivo, pues opera por debajo de las normas permisibles. Esta situación hizo crisis cuando los permisionarios pretendieron incrementar las tarifas sin ofrecer mejoras. Uno de los grupos más afectados eran los estudiantes, que siempre gozaron de un precio preferencial. Sin embargo, año con año, al aumentar las tarifas, los transportistas tienden a omitir esa prerrogativa, provocando enfrentamientos donde se secuestran y queman unidades. El último conflicto se dio en los inicios de 1990, y adquirió tal magnitud que intervinieron los partidos y las autoridades estatales. Ante las presiones priistas el actual presidente municipal, Jorge Cárdenas, se vio obligado a actuar como mediador entre los líderes estudiantiles y las autoridades estatales responsables.

Se puede decir que, en general, los gobiernos municipales de Matamoros han favorecido poco a los estratos populares, a pesar de que una enorme cantidad de trabajadores forma parte de ella. Sin embargo, se ha invertido en áreas populares, con algunas obras municipales del Pronasol. En materia de infraestructura, en la actualidad Matamoros se ubica a la cabeza del estado en ciertos servicios gracias también a la colaboración de los sectores obrero y patronal.

En cuanto a la historia política del dirigente Agapito González y su central, se puede decir que hasta los setenta la historia electoral y la del PRI local fue una y la misma, cuando los derrotó Jorge Cárdenas. Desde entonces, Agapito se retiró de la arena política para concentrar sus combates hacia una política laboral cada vez más radical, comparada con la que vive el país y, por ello, cada vez más de confrontación con el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y con los empresarios en general... Hasta que lo aprehendieron.

Esto expresa también cómo social y políticamente la comunidad local ha tendido a desplazar la hegemonía de ese liderazgo y así minar su estructura de poder. Pero, sin ofrecer una nueva ordenación sólida, coherente, esto lleva a situaciones electorales fluctuantes. De allí la importancia que ha adquirido la lucha municipal.

La organización campesina está dominada por la CNC, dirigida por Lupita Flores. Sin embargo, los ejidos han sido absorbidos por la mancha urbana; la inmensa mayoría de los ejidatarios son ahora obreros industriales o de servicios. Empero, no debe olvidarse que hay sorgo, maíz y, en los últimos tiempos, bongó y algodón, cultivos que convocan para la época de la cosecha a casi 10 000 migrantes.

La atmósfera de una elección de ayuntamiento y de diputados locales es distinta de una elección federal. Predominan las preocupaciones locales, circunscritas a qué puede hacerse en la ciudad, quién es el que pudo hacerlo antes o quién parece prometer mejor las necesarias obras locales. Así, la ciudadanía matamorenses elige candidatos de acuerdo con las experiencias, especialmente de quienes obtuvieron servicios.

Por ello, Jorge Cárdenas fue un candidato al que se adhirieron muchos matamorenses. Conocían su actuación anterior al frente del municipio. No importaba tanto su discurso político —que de hecho no tenía, como tampoco lo tenían los otros contendientes— como su imagen. En 1989 Matamoros estaba cubierto por pinturas, banderines, e incluso anuncios luminosos que representaban unos grandes bigotes. A partir de esa imagen todos reconocían al candidato del PARM, Jorge Cárdenas González.

Los otros partidos no gozaban de esa ventaja. El PAN presentaba a Jesús Siller, prácticamente sin presencia. Acción Nacional debía luchar, además, contra una división partidaria a causa de que un caudillo local y ex representante federal, Rubén Rubiano, fue desconocido por la dirigencia nacional.

El PRI lanzó como candidato a Múzquiz, ganadero y agricultor apoyado más por el gobernador que por su arraigo local. En la selección del candidato priista hubo disputas entre la dirigencia estatal, el gobierno del estado y los dirigentes corporativos de la CTM y la CNC en Matamoros.

El proceso electoral de 1991 sucedió en un contexto distinto al de 1989. Los partidos políticos se habían alineado de distinta forma. El PARM trataría de mantener el dominio local; sin embargo, lanzó un candidato mucho menos popular y con menos apoyo que Jorge Cárdenas. Además, se enfrentaba a un candidato priista que si bien contaba con menor arrastre local, sí lo apoyaban de manera decidida el financiamiento de su partido y las organizaciones priistas locales, concertadas de mejor forma que en 1989; este candidato fue Tomás Yarrington, quien antes era el encargado de Programación en el estado. Para el Senado, el PRI lanzó al entonces diputado por el VIII distrito federal, Manuel Cavazos Lerma, encargado también del Pronasol en Tamaulipas y hoy candidato al gobierno del estado, quien inició su campaña precisamente en Matamoros.

Debe notarse que en la práctica electoral las candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados no fueron tan coordinadas como lo planteara la estrategia nacional del PRI. Cada candidato se abocó a seducir a distintas clientelas y públicos locales; como resultado la proporción de votos en favor del senador priista fue mucho mayor que por el diputado. En este caso, también hay que considerar que si bien ambos candidatos apelaron a su origen matamorenses, estrictamente hablando habían realizado su carrera política fuera del terruño. Sin embargo, esta vez el

arraigo de Cavazos era mayor que cuando fue designado candidato por el rural VIII distrito; ahora pudo apelar legítimamente a su origen social y local en Matamoros, más que el mismo Yarrington. Esto originó movilizaciones y fuerzas de apoyo distintas. Las campañas fueron relativamente cortas, nutridas de publicidad en las calles y los medios, pero con pocas y selectas reuniones públicas. En este proceso fue claro el dominio financiero del PRI. El PARM apenas figuró en pequeños actos públicos y en la radio local. El PAN, el PRD y el resto de los partidos tuvieron aún menos presencia, dejando notar que este proceso electoral se configuró fundamentalmente como un escenario de confrontación de dos partidos, en el cual se disputaban muchas cosas más que el solo asiento camaral.

En esta campaña se trataba de deslindar cuál sería la fuerza de los parmistas y de su líder local, Cárdenas González, en tanto éste pudiera mantener su dominio electoral en la ciudad, lanzarse como candidato a senador o abrirse paso para la gubernatura.

La solución priista incluyó un recurso familiar como antídoto a la candidatura de Jorge Cárdenas: nombró como suplente de Cavazos Lerma a Enrique Cárdenas, hermano de Jorge y otrora gobernador de la entidad, como ya se dijo. Además, en la localidad el PRI instrumentó un movimiento de protesta que intentó desaforar al presidente del ayuntamiento, obligándolo a negociar con el gobernador y con grupos priistas. Estos acuerdos terminaron por minar la beligerancia con la cual comandaba sus fuerzas políticas locales. Esto apaciguó los ímpetus parmistas en la localidad.

Igual que en 1989, los nacientes programas de Solidaridad en las colonias populares, a la cabeza la regularización de la tenencia de la tierra y la construcción de obras para servir a las precarias colonias matamorenas, permitieron organizar campañas priistas consistentes en acuerdos para concertar obras, máxime que el municipio, empantanado en sus disputas con los priistas, se retrasó en mejorar los servicios locales. Esto se apuntaló con una estrategia electoral que apeló a las bases territoriales del partido, más que a las cúpulas sectoriales que estaban en franca confrontación

Esto muestra cómo tanto el PRI nacional como sus miembros locales aprendieron las lecciones de dos procesos electorales adversos, el municipal de 1989 y el nacional de 1988. La concertación, a pesar de la continua intriga entre los grupos locales, terminó por surtir efectos positivos. La candidatura llamada de unidad sacó adelante la campaña sin desaciertos. Si Tomás Yarrington se hubiera lanzado como precandidato en una asamblea priista local, hubiera tenido que concursar con dirigentes representantes de diversos grupos, quienes se veían con mejores

posibilidades que su adversario, ante la posibilidad de manejar las convenciones. Esto hubiera mostrado un partido con fuerzas centrífugas, como en realidad es el PRI local, y no el partido unitario que se trató de configurar. A la precandidatura de Yarrington se interpusieron la del líder de los maestros y dirigente impugnado del sector popular; la de Lupita Flores, diputada local por el distrito agrario de Matamoros; y la del encargado de la Corett en la región; el sector obrero también exhibió sus candidatos.

La FRTM, ahora comandada por Leocadio Mendoza, surgido de la prole de Agapito González, aparentemente no tuvo la oportunidad de imponer un candidato, aunque su apoyo a los designados fue decisivo, ya que también Leocadio Mendoza figuró en las listas preliminares. En el contexto de relaciones endurecidas, que llevarían al encarcelamiento del líder de la Federación, los dirigentes de ésta y del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI) se pronunciaron pública y abiertamente en favor de la candidatura de Cavazos Lerma para senador, apelando a antiguas ligas de amistad y no sólo coincidencia ideológica; asimismo apoyaron, pero con menos entusiasmo, al candidato a diputado.

La evolución política de la localidad se ha compuesto también por la confrontación, violenta y —en opinión de los colonos— peligrosa, entre grupos de narcotraficantes y las policías que se dedican a combatirlos. Esta lucha ha tenido episodios violentos y espectaculares, como aquel en que se aprehendió a uno de los personajes políticos y del dinero más famosos de la localidad, Juan N. Guerra, quien fuera líder político y económico, propietario de buena cantidad de negocios locales, que ocupara puestos de influencia social local y promoviera entre su parentela a presidentes municipales.

Victoria, Hidalgo y Güémez. El segundo escenario es de contrastes, los municipios centrales de Tamaulipas: Victoria, Hidalgo y Güémez, que se encuentran dentro del VIII distrito electoral federal. Éste abarca buena cantidad de municipios del centro del estado, entre ellos Hidalgo, Mainero, Güémez, Padilla, San Fernando, Jiménez, Burgos, Villagrán, San Nicolás y San Carlos. Municipios rurales, con diversos patrones productivos, con una mayoría de población dedicada a la agricultura, en donde destacan la zona citrícola de Hidalgo, Victoria, Padilla, Güémez, parte de Villagrán y Mainero; ésta contrasta con las zonas semiáridas de San Nicolás, San Carlos, Burgos, parte de Jiménez y parte de San Fernando, con población de escasos recursos y actividades productivas prácticamente de subsistencia. Contrasta también con la zona ganadera de Jiménez y San Fernando así como con las zonas de riego en donde se ha difundido la siembra de sorgo y oleaginosas. Es un distrito rural con diversidad

de productos, de niveles de ingreso y de participación de la población campesina, la mayoría agrupada en la antigua Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Tamaulipas, cuyo líder actual es Perfecto Solís, y antes lo fue Hugo Andrés Araujo. Allí, la configuración de las fuerzas públicas obedece a patrones de organización rural tradicional, empezando por los comisarios ejidales que muchas veces son también, como en el caso de Hidalgo y Güémez, delegados municipales que ocupan algún cargo en la policía local o dirigen los programas municipales de obras públicas, ya apoyados por el Pronasol, ya por el estado bajo el membrete de Voluntad y Trabajo. Región fundamentalmente agrícola, excepto el núcleo urbano de la capital, ha sido un arquetipo priista en cuanto a la configuración de los poderes locales, a la organización de los partidos y a la lucha electoral.

El VIII distrito nos habla de espacios de ocupación doble, por las élites tanto nacionales como locales (aunque predominantemente federales, a juzgar por los candidatos). Es el lugar electoral de prueba y fogeo de liderazgos político-electivos de funcionarios en ascenso nacional. Así lo muestran Cavazos Lerma y Hugo Andrés Araujo. Pero el VIII distrito es también uno de los cada vez más escasos nichos eminentemente rurales, unánimemente priista y sólidamente abstencionista.

Desde la campaña presidencial de 1988 prefiguraron dos cabezas políticas con futuro en Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo, actual secretario general de la CNC y negociador de las recientes reformas al artículo 27 constitucional, y Manuel Cavazos Lerma, quien entre otros cargos ocupó la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, fue candidato a diputado por el VIII distrito electoral en 1988, a senador en 1991 y ahora a gobernador.

La candidatura de Cavazos Lerma fue tempranamente anunciada desde su nombramiento como encargado del Pronasol en Tamaulipas. Desde esa oficina estableció contactos con grupos activos de pobladores en todo el estado y se dedicó a realizar obras sociales con el sello federal, abriéndole un boquete al programa social del estado —Voluntad y Trabajo—, y disputándole los agradecimientos sociales consecuentes. Pero su fuerza política se inicia realmente con el ascenso del actual presidente de la República.

A diferencia de otras ocasiones, en que se captaban votos más allá de los padrones electorales, ahora se ha recurrido al acarreo de votantes, voluntarios o no, para que acudan a las urnas, de manera tal que en las elecciones de 1991 los comisariados ejidales se encargaron de transportar electores a las casillas; para ello se contó con el apoyo del PRI, que ufragó los costos. Se dice en muchos ejidos, como La Diana, Guillermo Juárez o Vicente Guerrero, en Hidalgo, que la estrategia fue muy efi-

caz, dado que se contó con recursos, pero que también el candidato Andrés Araujo intentó acercarse más a la población, estableció contacto con ellos más allá de los mítines y reuniones de campaña, envió a sus colaboradores para comunicarse con los ejidos, lo que resultó en un mejor conocimiento del joven candidato y un incremento de la votación en su favor. Asimismo, durante 1991 el grupo de trabajo del ya diputado realizó giras en la región con el objeto de dar a conocer a sus electores la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional. No obstante, en las reuniones en los ejidos pudimos observar que había confusión y desconocimiento en distintos grados de la iniciativa, que los "rotafolios" diseñados para exponer los cambios eran bien recibidos pero no resolvían las dudas fundamentales, como la cuestión de la propiedad de la tierra que, finalmente, como la comunicación seguía con un carácter vertical, obligando o partiendo de la tradicional pasividad del ejidatario.

El centro agrícola de Tamaulipas es el laboratorio de los cambios rurales, de la posibilidad de convertir una liga campesina, que organizó a los hombres del campo para movilizarlos, en una nueva organización, política también, pero que tome en cuenta el proceso de diferenciación socioeconómica que ha ocurrido en la zona, que partiendo de él propicie cambios con sentido también productivo y no sólo político. Ese corporativismo desmovilizador ha logrado en el VIII distrito su expresión más extrema, el más alto abstencionismo y la más decidida supremacía del exterior sobre los intereses políticos locales. El riesgo es llevar este territorio ocupado a un vacío político, si los cambios se producen.

Los escenarios de Matamoros y del VIII distrito son profundamente diferentes en configuración, fuerzas sociales, etc., y ofrecen un panorama similar en lo que se refiere a la interacción de las fuerzas nacionales y regionales con grupos en la localidad.

Mientras el espacio político de Matamoros se abre cada vez más a la disputa y decisión de los grupos locales, en el VIII distrito las candidaturas a las diputaciones federales aún son prerrogativas de las cúpulas políticas y no de sus lugareños; sin embargo, también en este lugar puede preverse con cierta nitidez que el esfuerzo territorial del PRI y del gobierno tendrá efectos en cuanto a las candidaturas y a las maneras en que se movilice la población.

V. A manera de conclusiones

Queremos abordar ahora, en una suerte de resumen, algunos puntos con referencia a los poderes locales y su vinculación con el poder federal.

1. En Tamaulipas continúa una estructura de poder fragmentada,

más aún con la desarticulación de varias burocracias sindicales, cuyo aparato de poder no se ha sustituido por otro.

2. Mientras en las ciudades parece haber una mayor participación y un esbozo de construcción ciudadana, el sector rural permanece estático y sin mayores cambios. Los partidos políticos se han desarrollado en las áreas urbanas, pero han tenido poca penetración en las rurales —excepto el PRI, que por diversas razones tiene presencia en ambas áreas— y todavía constituyen más focos aislados de poder local que partidos con presencia estatal.

3. La figura del gobernador y el poder estatal como intermediarios entre las distintas élites locales ha sido socavada por la casi constante intervención federal.

4. El poder federal ha intervenido frecuente y profundamente en Tamaulipas. Por un lado, a partir del desplazamiento de cierto tipo de liderazgos sindicales y, por otro, por la acción del Pronasol. Ambas circunstancias lo han convertido en un interlocutor destacado en el proceso local.

5. Frente a los cambios políticos y económicos suscitados en la entidad, las posibilidades de construir un nuevo sistema de intermediación o, en otras palabras, de relaciones de poder, pasa por las posibilidades de reordenar los corporativismos sindical y rural, engarzándolos en una serie de redes de organizaciones políticas de orden territorial, redes que han sido promovidas, desde el Estado, a partir del Pronasol. Por último, desde los cambios al artículo 27 constitucional es claro que cualquier tipo de reorganización política de los productores rurales tendrá que ver más con sus intereses regionales o locales que con las antiguas organizaciones corporativistas verticales.

Recibido en febrero de 1992

Revisado en julio de 1992

Correspondencia: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

